

Crear dos, tres... muchas Colombia

David Barrios Rodríguez

DOI: 10.54871/gS23b10f

Colombia ha sido durante mucho tiempo un socio estratégico para los Estados Unidos, y su éxito en la lucha contra las FARC ha sido un importante logro mutuo. La experiencia de Colombia en esa lucha y en sus campañas contra el tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado le ha dado al país una considerable experiencia en seguridad. Como resultado, Colombia ahora ayuda a capacitar y preparar a las fuerzas de seguridad en otras partes de la región y en todo el mundo, y esa es una forma más en la que la inversión de Estados Unidos en Colombia ha dado sus frutos.

General David Petraeus

La modalidad de guerra irregular

Con la llegada del siglo XXI, es patente la generalización de formas de guerra irregular, lo que ahora se manifiesta en las definiciones doctrinarias de las propias Fuerzas Armadas, contradiciendo con ello la tendencia que dominó el imaginario en la centuria pasada. Dicha propagación guarda relación con las modalidades que adquirieron los conflictos armados con posterioridad al 2001, es decir cuando la enemistad bélica comenzó a ser redirigida hacia amenazas no estatales.

El Joint Chief of Staff (JCS), en la versión actualizada de su Doctrina para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, establece que, en el presente, reconocen dos tipos de guerra: la tradicional, identificable con el canon construido a lo largo del siglo XX (aunque remite a la instauración de *jure* del orden Westfaliano), mismo que supone el enfrentamiento entre Estados nacionales o coaliciones/alianzas entre estos y que suele emparentarse con combates de fuerzas regulares

en todos los dominios físicos, incluyendo la actualización de los ámbitos de la información. El otro tipo de confrontación es la irregular, en la que participan fuerzas de Estados nacionales, así como otras no adscritas formalmente a la estatalidad y que pugnan por obtener legitimidad o influencia sobre población considerada relevante, siendo característica de este tipo de guerra la asimetría entre las fuerzas contendientes.¹

En lo que respecta a Colombia, el proceso de transformación del ejército iniciado en 2015 con el Plan Minerva fue acompañado en términos doctrinarios por el Proyecto Damasco que busca reestructurar de manera secuencial y metódica los principios de intervención militar del país andino, haciéndolos compatibles con la fuerza conjunta nacional y multinacional (MFE 1-01 Doctrina, 2017). Dentro de este, el Manual Fundamental de Referencia del Ejército 3.0-Operaciones (MFRE) y el Manual de Campaña del Ejército 3-24.0 (MCE) definen la guerra irregular de manera idéntica a Estados Unidos. Llevan a cabo la puntualización de que el énfasis de este tipo de guerra depende del nivel en que se lleve a cabo el análisis. En el enfoque estratégico se trata de influir y controlar a la población, mientras que en términos operacionales implica establecer formas de aproximación indirectas respecto a la planeación y la ejecución de campañas y operaciones.² En lo que respecta al nivel táctico, supone la aplicación asimétrica de

¹ El uso del término *irregular* en lo referente a Estados Unidos remite a la edición 2006 del *Quadrennial Defense Review* (QDR), donde se delinearon cuatro tipos de amenazas, a saber: irregulares, catastróficas, disruptivas y tradicionales. Al mismo tiempo, el reporte consideró el tránsito desde operaciones en la lógica interestatal, a otras de carácter asimétrico e irregular (DOD, 2006). Dicha publicación, emanada de un mandato legislativo, delineaba las prioridades, retos y la estrategia del Departamento de Defensa. Fue sustituida por la *National Defense Strategy* (NDS) a partir de 2018 y solo se da a conocer un resumen ejecutivo, ya que a diferencia de QDR es un documento clasificado (DOD, 2019).

² Una aproximación directa supone atacar el centro de gravedad del enemigo aplicando poder de combate, mientras que la aproximación indirecta parte de atacar el centro de gravedad del enemigo a partir de distintos puntos (MFRE 3-0 Operaciones).

técnicas y procedimientos.³ Aclaran que si bien la Guerra Irregular abarca múltiples actividades, su núcleo es la insurgencia y la contra-insurgencia (COIN).⁴ Para los objetivos de este texto, destaca también la aseveración de que la reestructuración doctrinaria señalada “consolida los conocimientos adquiridos en más de sesenta años de conflicto” (MFRE 3-0 Operaciones, 2017) por parte del Ejército colombiano.

De manera más general, la incorporación doctrinaria-formal de la guerra irregular por parte de Estados Unidos expresa una modificación de gran trascendencia y que resulta decisiva para la adaptación de las modalidades contemporáneas de hacer la guerra, entre otras razones, por los convenios de colaboración en materia militar y de seguridad que tiene con países de los cinco continentes. En América Latina y el Caribe, el principal socio del hegemón es, de lejos y fuera de toda duda, Colombia, cuyo gobierno y Ejército, más que aceptar de manera pasiva la agenda de seguridad de Estados Unidos, han contribuido a su rediseño y, en años recientes, a su *exportación* a distintos lugares del mundo.

El momento preciso en que se puede advertir la inclusión formal de esta modalidad bélica por parte de Estados Unidos fue la emisión de la Directiva 3000.07 del DOD sobre Guerra Irregular en 2008, destinada a asignar responsabilidades para la conducción de este tipo de guerra. En ella se reconoció que “[...] IW is as strategically important as traditional warfare. Many of the capabilities and skills required for IW are applicable to traditional warfare, but their role in IW can be proportionally greater than in traditional warfare” (DOD, 2008).

³ Los manuales de campaña del Ejército colombiano son de carácter restringido y no están disponibles para su consulta en el sitio de internet de la institución castrense. Entre estos se cuentan el ya referido 3-24 Insurgencia y contrainsurgencia, el 3-24.2 Tácticas de contrainsurgencia, el 3-07 Estabilidad, el 3-22 Apoyo del Ejército a la cooperación en seguridad, el 3-53.0 Acción integral, el 3-61 Asuntos públicos, el 3-26 Contraterrorismo, el 2-0 Actividades de Inteligencia y el 2-22.1 Contrainteligencia.

⁴ En donde la contrainsurgencia mantiene como principales características la “[...]mezcla de esfuerzos militares y civiles de carácter comprehensivo diseñados de manera simultánea para contener y derrotar a la insurgencia, dirigiéndose a sus orígenes” (ICOS, 2020).

Para precisar aun más la definición de las amenazas identificadas con la guerra irregular, la aproximación del DOD expresada en el documento *Joint Operating Concept. Irregular Warfare: Countering Irregular Threats*, establece que se trata de “Adaptive adversaries such as terrorists, insurgents, and criminal networks as well as states will increasingly resort to irregular forms of warfare as effective ways to challenge conventional military powers” (DOD, 2010).⁵ Esto denota una reconceptualización respecto a las ideas dominantes y formalmente reconocidas que, de manera previa, escindían la acción bélica del Estado respecto a expresiones no estatales.

En relación a la dicotomía entre Guerra Irregular/Guerra Tradicional, solo es preciso apuntar que la distinción aquí esbozada tiene fines analíticos, mientras que en su materialización en la conducción de las guerras actuales y venideras, funciona como una dupla que combina elementos estratégicos, logísticos, operacionales y tácticos. Esto es puesto de relieve tanto en la doctrina militar de Estados Unidos como en la de Colombia:

Las formas de la guerra no se aplican en términos de una elección de “o esto o lo otro”, sino en varias combinaciones para adaptarse a la estrategia y las capacidades de un combatiente [...] La guerra es un todo unificado, que incorpora todos sus aspectos juntos, tradicionales e irregulares. Es, de hecho, la combinación creativa, dinámica y sinérgica de ambos la que suele ser más efectiva (JCOS, 2017).

La GI no es una forma subordinada de la guerra tradicional. Más bien, abarca un espectro de guerra donde la naturaleza y las características son significativamente diferentes de la guerra tradicional. La guerra tradicional y la GI no son mutuamente excluyentes, ambas formas de guerra pueden estar presentes en un conflicto dado. Los comandantes deben entender que la naturaleza de la guerra a menudo cambiará en el curso de un conflicto. Esto es especialmente cierto

⁵ La primera versión del *Irregular Warfare. Joint Operating Concept* data de 2007 lo cual es consistente con la incorporación doctrinaria formal de esta modalidad de guerra. Consultar la primera cita de este apartado.

en la GI donde el conflicto es a menudo prolongado. La guerra tradicional puede evolucionar rápidamente hacia una guerra irregular y viceversa, requiriendo que la fuerza militar se adapte de una forma a otra (MFRE 3-0 Operaciones, 2017, pp. 2-9)

Una precisión adicional que merece ser traída a cuenta es que no resultan equivalentes las caracterizaciones irregular / no convencional / no tradicional. La enunciación como no convencional / no tradicional ha sido cuestionada en virtud de que la tendencia dominante desde hace décadas es precisamente la de confrontaciones de carácter interno, o en la que tienen participación estados y actores no estatales.⁶

En cambio, la elección en torno al carácter *irregular* de la guerra no solo está relacionada con la frecuencia con la que se desarrollan los conflictos, lo que daría pie a pensar el proceso en términos de encontrarnos frente a una “nueva regularidad de la guerra” (Nievas y Bonavena, 2014), sino con el recurso de tácticas irregulares. Entre estas, aquellas no amparadas en los marcos normativos que deberían sancionar este tipo de fenómenos, por ejemplo los ataques a la población civil, el recurso de la tortura, desaparición forzada, *falsos positivos* o asesinatos masivos.⁷

⁶ La propia definición de Estados Unidos sobre la guerra no convencional da cuenta de ello, al considerar que se trata de “operaciones y actividades conducidas para permitir a un movimiento de resistencia o insurgencia forzar, desbaratar o derrocar a un gobierno o poder de ocupación, operando a través o en colaboración de una fuerza clandestina, auxiliar y de guerra de guerrillas en un área de incursión subrepticia” (JCS, 2014). Con ello, se pone de relieve la actuación conjunta con actores armados no estatales.

⁷ La denominación *falsos positivos* alude a un tipo específico de ejecución extrajudicial utilizada por las fuerzas armadas colombianas. Se trata de asesinatos intencionales de civiles que son artificialmente presentados como muertes en combate con la pretensión de mostrar resultados exitosos. Si bien dicha práctica tiene antecedentes históricos en Colombia, su generalización durante los mandatos de Álvaro Uribe estuvo asociada con la emisión de una directiva que otorgaba recompensas a la muerte de integrantes de la insurgencia. Como resultado de ello, hacia 2012, la Fiscalía de Colombia tenía cerca de 5 mil casos reportados (Movimiento de Reconciliación FOR y Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos-CCEEU, 2014).

Más allá de su incorporación formal en las últimas décadas, la guerra irregular hace parte de un largo recorrido en las adaptaciones de la lógica militar. La generalización de un sentido sobre la guerra con ejércitos profesionales, convenciones normativas en materia de acción y combate, e inclusive la presunta conformación de una ética anclada en el respeto a la población civil, resultan al mismo tiempo una idealización y coartada occidental, restringida a un periodo histórico muy concreto. Junto con ello, se debe insistir en que el despliegue de este tipo de guerra resultó selectivo, lo que resulta especialmente nítido si observamos la manera como Europa Occidental y después Estados Unidos han llevado a cabo procesos de expansión territorial o intervención en otros lugares del planeta.

Colombia en la estrategia hegemónica

Mientras nos aproximamos al primer cuarto del siglo XXI, queda de relieve que se cumplió una cierta transición en las modalidades del hegemón para hacer la guerra. A finales de la centuria pasada con el colapso del Bloque Socialista, Estados Unidos apareció como potencia bélica mundial sin rivales cercanos. Por aquellos años se puso en evidencia la capacidad de despliegue que hacía patente la ventaja militar con la que comenzó el presente siglo: “[...] proyectar energía cuando y donde la necesitábamos en todo el mundo. No seríamos muy disputados. Y podríamos operar libremente en todos los dominios”. (Dunford, 2018).

Se trata del periodo de tiempo que albergó desde el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la Primera Guerra del Golfo, las modalidades de intervención que fueron implementadas en los conflictos que dieron lugar a la desintegración de Yugoslavia, así como a otros eventos bélicos en las postrimerías del siglo XX.

La siguiente modificación de gran relevancia estuvo determinada por las incursiones bélicas en Afganistán e Irak a inicios del presente siglo. Estas reconfiguraron las modalidades de la guerra y las condujeron hacia distintas vertientes de guerra irregular (contrainsurgencia, contraterrorismo, defensa interna extranjera,

estabilización, reconstrucción), con lo que también se modificaron las coordenadas de comprensión de los conflictos en relación al papel del Estado, la territorialidad o el orden jurídico internacional.⁸ Las características inherentes a este tipo de guerra, en la que el objetivo central es la población, ha conducido a la renovación de los repertorios previos, incrementando el énfasis en las operaciones de guerra psicológica (*PSYOP*), información e inteligencia, dotando además de una importancia central a la aproximación y comprensión de los elementos culturales que entran en confrontación.

En la actualidad, podemos observar un renovado proceso de redefinición / reincorporación de las amenazas desde la perspectiva de Estados Unidos, pero con importantes vínculos en Europa y en específico con los países que integran la OTAN. Se trata de la conjunción de las amenazas asimétricas con las cuales lidiaron durante los últimos 10 o 15 años y la reemergencia de la disputa con potencias equivalentes.⁹

A partir de esa periodización en el tránsito entre el siglo XX y el proceso reciente, el presente texto hará énfasis en la conformación de la guerra irregular como tipo dominante de hacer la guerra en la actualidad. Esto supone reconocer que al ser incorporada de manera esquiva (pero formal) a la doctrina militar de los Estados, tenderá a

⁸ El concepto *Foreign Internal Defense (FID)* refiere a “[...]participation by civilian agencies and military forces of a government or international organization in any of the programs or activities taken by a host nation (HN) government to free and protect its society from subversion, lawlessness, insurgency, violent extremism, terrorism, and other threats to its security”. Incluye tres modalidades: apoyo indirecto, apoyo directo (sin involucramiento en operaciones de combate) y participación en operaciones de combate por parte de Estados Unidos. En este último caso, formalmente debe ser aprobado por el presidente de Estados Unidos (JCS, 2018).

⁹ Ecuación que, en un primer momento, fue establecida como 4+1, en referencia a 4 Estados nacionales (China, Rusia, Irán y Corea del Norte) siendo la quinta amenaza el terrorismo, es decir, la coexistencia de enemigos estatales con no estatales (Dunford, 2016). Un poco más adelante se consideró que ante las ostensibles diferencias entre los estados señalados, resultaba más apropiado establecer la fórmula como 2 + 3 que implica reconocer que las de mayor envergadura son las representadas por China y Rusia, consideradas potencias *revisionistas* o *near peer adversaries*, mientras que en el otro conjunto podrían ser albergados *rogue states* como Irán, Corea del Norte, así como las Organizaciones Violentas Extremistas (VEOS) que incluyen Redes Criminales Transnacionales, terroristas y otros actores armados no estatales (Ceceña y Barrios, 2019; Dunford, 2018; DoD, 2018).

irradiar la lógica para lidiar con expresiones de conflictividad social y llevar a cabo las guerras venideras.

En términos históricos, la adopción doctrinaria formal de este tipo de guerra contempla como decisivas las incursiones de Estados Unidos en Afganistán e Irak con el lanzamiento de la guerra contra el terrorismo (GWT), pero también es considerado como paradigma de esta transición el recorrido contemporáneo de Colombia (Marks, Gorka y Sharp, 2010). Esto obedece a que después de décadas de violencia y de haber sido considerado como un Estado fallido, a partir de la primera década del presente siglo, el país andino logró constituir no solo “[...]uno de los ejércitos de guerra irregular más capaces y eficaces del mundo” (Marks, 2010), sino llevar adelante un enfoque de la contrainsurgencia que involucró a toda la sociedad.¹⁰ Esto permite observar dos de los elementos de continuidad con las formas de justificación de las guerras contemporáneas: la invocación de los estados fallidos (Ceceña, 2010) y las dimensiones doctrinarias que enfatizan el papel de las poblaciones.

Para que esto ocurriera, Estados Unidos ha tenido un papel preponderante, posibilitado por la instauración desde hace al menos 20 años de condiciones de intervención directa en Colombia sin parangón en el contexto hemisférico, siendo también este país el que recibe mayor apoyo logístico, financiero y militar en el área. El acercamiento con el país andino le permitió a Estados Unidos ensayar distintos elementos de lo que a la postre sería conocido como Building Partner Capacity (BPC), una manera tanto de *reducir* su huella militar como de encubrir la persistencia de su intervencionismo a escala global.¹¹

¹⁰ Proyecto que resulta especialmente nítido en el documento Estrategia Militar de Colombia 2003 a través de los objetivos de dominio y control de áreas estratégicas, corredores de movilidad, instauración de una red de *cooperantes*, control de población y recursos, así como la expansión de la presencia del Estado.

¹¹ A mediados de la década de los noventa y a pesar de la capacidad bélica mostrada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los resultados de las incursiones en Bosnia, Haití y Somalia habrían provocado reticencia de la opinión pública y de la jerarquía militar a llevar a cabo intervenciones de gran tamaño. Por ello la asistencia e intercambios económicos, logísticos y de entrenamiento militar con Colombia permitieron vislumbrar alternativas que después serían adoptadas de manera general (Marra y Bennett, 2020).

Tabla 1. Asistencia de Estados Unidos a Colombia por dependencia de Estado y USAID (en millones de dólares, años fiscales 2012-2020)

Procedencia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo de apoyo económico	172	168,8	141,5	133	126	180,3	180,3	187,3	146,3
Educación y entrenamiento militar internacional	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,3	1,9
Control internacional de narcóticos y refuerzo legal	160,6	152,3	149	135,2	135,2	143	143	170	180
No proliferación, antiterrorismo, desminado y programas relacionados	4,8	5,1	4,3	4,3	3,5	21	21	21	21
Financiamiento militar extranjero	40	28,9	28,5	27	27	38,5	38,5	38,5	38,5
Asistencia para el desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	61

Fuente: Beittel, J. 2020 Colombia background and U.S. relations, Congressional Research Service <<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43813>> acceso 01 de mayo de 2021

Tabla 2. Asistencia de Estados Unidos en Paz y Seguridad en 2019 en países seleccionados de América Latina (millones de dólares)

País	Paz y Seguridad	Porcentaje total respecto a la asistencia de EU
Colombia	106,14	33%
México	62,25	35%
Perú	12,72	17%
Panamá	10,08	48%
Guatemala	9,01	4%
Honduras	8,69	6%
El Salvador	5,31	3%
Brasil	1	3%

En el rubro paz y seguridad, se incluye: combate a las armas de destrucción masiva, reconciliación y mitigación del conflicto, actividades contra el narcotráfico, actividades contra el terrorismo, paz y seguridad general, operaciones de estabilización y reforma al sector de seguridad y crimen transnacional. Fuente: página del gobierno de Estados Unidos foreignassistance.gov

Con ello, Colombia se perfiló como uno de los puestos de avanzada de la “[...] deslocalización geográfica de la política de Estado formulada por el Pentágono [siendo] un experimento equivalente al de Israel [...] Colombia se erige como sede subalterna de la política estadounidense” (Ceceña, 2010).¹² En dicha dinámica, el país andino destaca por sus cualidades geoestratégicas que permiten la articulación entre Centro y Sudamérica, así como por ser el único sitio en la región sur del hemisferio que cuenta con acceso tanto al Océano Atlántico como al Pacífico.

Desde entonces, Colombia se ha convertido en un socio privilegiado de Estados Unidos en tres ámbitos interrelacionados que merecen ser puestos de relieve. En primer lugar, como modelo de la asistencia militar de Estados Unidos, en especial a partir de lo observado entre finales de la década de los años noventa (con el lanzamiento del Plan Colombia) y hasta la actualidad, lo que incluso ha sido considerada la referencia para llevar a cabo esta estrategia en otras geografías del planeta (Lindsay Poland, 2018).

En segundo, destaca el papel que comporta en el afianzamiento de la estrategia que busca delegar en otros países el avance de la agenda norteamericana, un discurso que se reitera en diversos documentos estratégicos y de manera específica en los que produce de manera constante el Southern Command. Se trata de la ampliación de aquello que fue referido como BPC, pero que alberga la realización de una amplia gama de formas de cooperación: doctrinarias, de acción conjunta y de capacidades militares. Esto se verifica tanto en el despliegue territorial en América Latina y el Caribe, a través del papel asignado a este país por el Colombia Action Plan on Regional Security, dedicado desde 2012 a entrenar a ejércitos y policías de países caribeños y centroamericanos (CRS, 2019); como de la participación

¹² Destacando de este proceso el bombardeo en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos en marzo de 2008 y el ulterior Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América (2009), el mismo que sería rechazado por la Corte Constitucional al año siguiente.

de efectivos del país andino en misiones de *estabilización* de la ONU y como único país de América Latina y el Caribe considerado socio global por la OTAN (OTAN, 2018).¹³ A ello se agrega su reciente inclusión como país miembro de la OCDE (abril de 2020). Se trata de una relación que, como era señalado antes, abarca distintas dimensiones y escalas territoriales:

Colabora en los objetivos diplomáticos de EE. UU. en las Naciones Unidas en temas como Ucrania, Siria y Corea del Norte, coopera en la lucha contra el crimen organizado transnacional, proporciona un mercado en expansión para los productos y servicios de EE. UU. y aporta experiencia en seguridad a América Central, Afganistán, varios países de África y las Naciones Unidas (Blunt et al., 2017).

Finalmente, resalta la retroalimentación que existe entre el recorrido de la política de guerra irregular en Colombia con décadas de implementación de *facto* y la incorporación formal de esta estrategia por parte de Estados Unidos en su doctrina militar y las incursiones bélicas en el siglo XXI.

Conflicto armado de larga duración

Colombia ha contado con uno de los procesos de guerra más duraderos en la historia reciente, aunque suele ser presentado como un país donde la democracia procedimental funciona y en que no han resultado habituales los golpes de estado como en otras regiones de América Latina y el Caribe.¹⁴ Si miramos desde una perspectiva más

¹³ Se trata de un estatus específico que no implica ser miembro de la OTAN, pero que permite hacer parte en ejercicios, entrenamientos, cursos, conferencias, así como en distintos programas.

¹⁴ Sin embargo, solo en el siglo pasado, el Ejército intervino más de 20 veces en la política interna del país, al mismo tiempo que el Estado de sitio ha sido invocado de manera recurrente. Solo durante el Frente Nacional se estima que quince de los veinte años que duró la alternancia entre los partidos Liberal y Conservador, fueron regidos por el Estado de sitio (Puerta, 2010).

amplia, se trata de un país que desde su independencia hasta 2016, cuando se firman los acuerdos de paz en la Habana, ha estado más de tres cuartas partes del tiempo en guerra (Mills y Kilcullen, 2016), lo que hace plausible conceptualizarlo como un conflicto armado prolongado (Insuasty, Valencia y Restrepo, 2016).¹⁵

Esto es especialmente significativo en el contexto de América Latina y el Caribe, región que se caracteriza desde el siglo pasado por la casi ausencia de conflictos armados interestatales y en que la conflictividad social ha estado vinculada en la mayor parte de los casos con formas de violencia política.¹⁶ Con excepción de las guerras o conflictos internos en Perú, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, en el resto de los países la confrontación bélica en la segunda mitad del siglo XX fue de carácter restringido y derivó en la conformación de gobiernos de corte autoritario o directamente bajo el mando de dictaduras militares, todo ello en el marco de la Guerra Fría cuya expresión regional fue la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).¹⁷ Colombia,

¹⁵ Entre las confrontaciones destaca La Guerra de los Mil Días en el tránsito del siglo XIX al XX, protagonizada por Liberales y Conservadores y saldada con alrededor de 100 mil decesos. Dos elementos resaltan de la conflagración. Por un lado, la utilización de estrategias de guerra de guerrillas por parte del bando liberal, lo que a la postre tendrá continuidades con los procesos bélicos subsiguientes. Por el otro, la situación calamitosa en que quedó el país y que contribuyó con la independencia de Panamá en 1903, promovida por Estados Unidos y su interés en la construcción de un canal interoceánico. El otro proceso de gran trascendencia para es el periodo conocido como La Violencia en que de nuevo la disputa ocurrió entre los partidos Liberal y Conservador y que tiene vínculos históricos con el conflicto armado interno posterior.

¹⁶ Existe una polémica dentro de la historiografía colombiana sobre la continuidad entre el proceso de mediados del siglo XX conocido como La Violencia y la emergencia de los grupos insurgentes de izquierda en la década de los sesenta, lo cual modificaría la duración del enfrentamiento bélico por 20 años, lo que haría del colombiano el conflicto más antiguo del mundo por encima de los que enfrentan a Palestina e Israel, y a India y Paquistán (Pizarro, 2005).

¹⁷ Con ello, se alude a que a pesar de que guerrillas urbanas y/o rurales formaron parte de la escena regional general, hubo pocos lugares en las que estas adquirieron alcance nacional, como sí ocurrió en los ejemplos señalados. En algo que en la actualidad sería considerado como parte del repertorio de herramientas no militares para la consecución de objetivos estratégicos, la contrainsurgencia asociada con la DSN tuvo como complemento la iniciativa de asistencia económica y social conocida como Alianza para el Progreso (1961).

cuya última confrontación por motivos fronterizos se remonta a la disputa con Perú (1932-1943), a partir de ese momento, redirigió sus esfuerzos bélicos y la reestructuración paulatina de su Ejército hacia el control y la estabilidad interna (Ospina, 2013).

Desde cierta perspectiva que busca colonizar el sentido común, se alude a que el largo conflicto interno colombiano concluyó en septiembre de 2016 con la firma de los acuerdos de La Habana entre la representación del gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de mayor tamaño y alcance del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).¹⁸ Esta es una primera cuestión que debe ser sopesada a la luz de varios elementos. Por un lado, a partir de la pervivencia de otro de los grupos insurgentes de importancia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).¹⁹ También por la continuidad que tienen las actividades criminógenas / contrainsurgentes de las denominadas Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) que en términos generales provienen del curso seguido por el proceso de desmovilización paramilitar de 2003. Finalmente, otra consideración de gran peso que conduce a impugnar la finalización del conflicto armado, es la reactivación pública de una porción de las FARC-EP en agosto de 2019, pero que había comenzado un año antes (Márquez, 2019).

Estos elementos que remiten a la duración y modalidades del proceso para el caso colombiano deben ser considerados para la caracterización que se lleve a cabo sobre el papel que cumple en la actualidad en la región. Entre otras cosas, porque se han alterado las estrategias del gobierno con el pasar de las décadas y a partir del último decenio del siglo pasado, contó con la aparición o sofisticación de

¹⁸ Grupo cuyos orígenes se remontan a 1964, después de los ataques del Ejército colombiano a la aldea de Marquetalia, considerada una *república independiente* por el gobierno y donde coexistían liberales e integrantes del Partido Comunista. Adopta sus siglas en 1966, se trata de una insurgencia con eminente carácter campesino (Beltrán, 2015).

¹⁹ Organización político militar fundada también en 1964, inspirada en la Revolución Cubana y con mayor componente de clases medias, sectores universitarios/intelectuales y también con una fuerte relación con la Teología de la Liberación (Medina, 2019).

actores armados en la confrontación.²⁰ Cuando hablamos de Colombia, nos encontramos con la coexistencia de distintas *temporalidades*, marcos de acción bélica, así como de la actualización de los grupos en disputa. Por lo tanto, el ejemplo del país andino también previene de la utilización de marcos de interpretación lineal-etapistas, o que perciben en determinadas alteraciones, estruendosos cambios de rumbo en las lógicas de la guerra.

Dicha complejidad cuenta con un hilo conductor que nos permite comprender la actualización doctrinaria en las formas de hacer la guerra: la continuidad de las expresiones de guerra irregular que han sido recurrentes desde el siglo XX, en especial en lo que refiere a la contrainsurgencia. En el caso de Colombia, esto refiere a dos ámbitos principales estrechamente relacionados. Por un lado, la existencia a lo largo de las décadas de confrontaciones entre el Estado y distintos actores no estatales y por el otro, la colaboración que, desde mediados del siglo XX, Estados Unidos y el país latinoamericano han tenido para contrarrestar estas amenazas. No obstante que en el proceso colombiano es preciso distinguir entre las expresiones de violencia armada organizada (insurgencia, narcotráfico, paramilitarismo), el tratamiento del Estado ha encontrado en estas la manera de justificar el empleo de la guerra irregular.

Considerar la duración, modalidades y actores involucrados en el extenso conflicto armado resulta necesario también para evitar ciertas generalizaciones o simplificaciones. Esto es lo que ocurre cuando se contrasta con algunas de las conceptualizaciones de orden académico más recientes. Por ejemplo, que a diferencia de las *nuevas guerras* como han sido planteadas por Munkler (2005) y Kaldor (2001), Colombia ha contado desde hace décadas con reconocimiento internacional sobre la existencia de su conflicto armado, a tal grado que han sido reiterados los esfuerzos institucionales, nacionales e internacionales por establecer procesos de negociación entre las

²⁰ Como ocurre con el paramilitarismo contrainsurgente o a la actuación de las CMSP, lo que será abordado con mayor amplitud en las páginas siguientes.

partes. Además de ello, aunque comporta implicaciones específicas, no se trata de una confrontación en la que tenga un papel preponderante el carácter étnico o identitario de los contrincantes. Aun cuando es perceptible la incorporación de tecnología bélica de cierta envergadura, tampoco podría ser considerado un elemento central en la confrontación, con lo cual también se aleja de las conceptualizaciones que enfatizan esos aspectos, como ocurre con la propuesta de la Guerra de Cuarta Generación (Lind, 2005). Vinculado con lo anterior, pero como parte del enfoque en torno a la Guerra Híbrida, los elementos propagandísticos o de lucha a través de mecanismos no militares (Barrios, 2019) está presente desde hace tiempo, lo que sin duda ha contribuido a que Colombia cuente con una de las sociedades más militarizadas de la región y probablemente del mundo entero.

Uno de los aspectos en los cuales el proceso colombiano sí coincide con dichas elaboraciones, pero también con las modificaciones doctrinarias de las Fuerzas Armadas esbozada al inicio de este capítulo es que se trata de un conflicto que no corresponde con la versión dominante a lo largo del siglo XX que asimilaba la guerra con el orden interestatal internacional.²¹ Desde hace tiempo, desde distintas disciplinas, queda claro que el Estado ya no puede ser considerado el referente de la conflictividad social o el principal agente dentro de esta, sino que participan otros actores que en algunos casos resultan determinantes. En relación a ello, se puede señalar que el conflicto colombiano de tanto en tanto irradia las dinámicas de los países limítrofes, en especial Venezuela y Ecuador, pero esto también está relacionado con la participación de Estados Unidos o de las Compañías Militares y

²¹ Lo que merece una crítica historiográfica, ya que esa manera de comprender este tipo de fenómenos está anclada en una visión limitada de los mismos. En los países con una conformación inacabada, incompleta o divergente de la estatalidad y que por añadidura hacen parte del Sur Global, los procesos de violencia y guerra siempre estuvieron dirigidos de manera preponderante hacia asuntos de orden interno. En el marco de la Guerra Fría, operó un proceso de construcción de enemigos endógenos, entre los cuales tuvo un papel privilegiado el combate al comunismo o a distintas expresiones de disidencia social, fuesen estos sindicatos, movimientos estudiantiles, población organizada y desde luego organizaciones político-militares insurgentes.

de Seguridad Privadas (CMPS).²² Estos elementos también contravienen las nociones tradicionales en torno al territorio y la territorialidad.

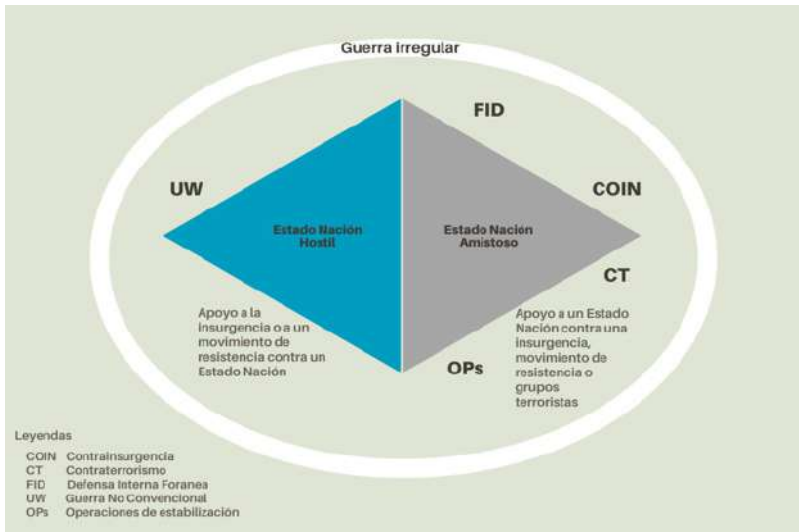
Guerra irregular y contrainsurgencia

Como fue anticipado, el conflicto armado prolongado de Colombia puede ser abordado a través de la puesta en funcionamiento de la guerra irregular y del apoyo que ha recibido el país andino por parte de Estados Unidos. Esto es especialmente nítido a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando comienza este tipo de colaboración, teniendo como momento culminante el tránsito de fines de la década del noventa hacia la presente centuria, cuando esta modalidad de guerra y en particular la contrainsurgencia fue incorporada de manera abierta en la agenda de ambos países. Tratándose de un conjunto de actividades que suelen oscilar entre la clandestinidad y su inclusión en las estructuras y funciones formales de las Fuerzas Armadas, tienen como componente fundamental a las Fuerzas de Operaciones Especiales, que se caracterizan por intervenir en una escala reducida, escenarios no reconocidos de manera abierta y que suelen buscar apoyo en la población civil. En el caso del despliegue extraterritorial del Special Operations Command (SOCOM) de Estados Unidos, establece este tipo de colaboración con grupos armados locales de diverso signo (formales, ilegales, *ciudadanos* y privados). Sobre la vinculación entre este tipo de fuerzas y la GI, en la actualidad el JCS establece:

²² En la hipótesis lejana de que tuviera lugar una guerra interestatal entre Colombia y Venezuela, se presume que la República Bolivariana difícilmente estaría en posibilidades de sostener una guerra de carácter tradicional, aunque sus aviones de combate son más modernos en relación a la flota aérea colombiana, a lo que se suma que Colombia cuenta con una capacidad limitada de defensa antiaérea, con lo cual podrían afectar instalaciones simbólicas en Bogotá o infraestructura petrolera crítica, en cambio: “Colombia has a highly developed irregular warfare capability and could carry out guerrilla-style raids nearly at will against Venezuelan forces, lines of supply, communications and infrastructure” (Spencer, 2019). En síntesis, el resultado de ese balance es que no debiera de ser una preocupación de los jerarcas militares colombianos.

[L]os SOF son seleccionados, capacitados y equipados para llevar a cabo todas las formas de IW. Las operaciones especiales consideran la totalidad de los aspectos cognitivos, informativos, físicos, culturales y sociales del entorno operativo para influir en el comportamiento de la población local a través de capacidades únicas para identificar e influir en las poblaciones relevantes, mejorar la estabilidad, prevenir conflictos y, cuando sea necesario, luchar y derrotar a los adversarios [...] Si bien las CF [fuerzas convencionales] también llevan a cabo algunas de estas actividades (p. ej., FID, SFA, asistencia humanitaria exterior [FHA] y COIN), las SOF las llevan a cabo utilizando tácticas, técnicas y procedimientos especializados, y en condiciones únicas y con diferentes estándares, pero de manera complementaria a las capacidades de CF (JCS, 2014: II-1, II-2).

Gráfico 1. Diagrama sobre la relación entre las operaciones especiales y la guerra irregular



Fuente: elaboración de David Barrios a partir del Joint Publication 1. Doctrine for the Armed Forces of the United States (2017).

El vertiginoso incremento en las actividades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos resulta un dato elocuente de la creciente importancia que tienen en los conflictos en el siglo XXI. De acuerdo con estimaciones de 2019, que provienen de datos del propio SOCOM, las fuerzas de Operaciones Especiales superan el volumen total de Fuerzas Armadas de distintos países del mundo, con más de 73 mil integrantes. Además de ello, resalta en 2019 su actuación en 144 países, lo que representa casi tres cuartas partes del planeta, desplegando 6700 comandos por semana en alrededor de 82 países (Turse, 2020).²³

Tabla 3. Comparación entre efectivos de las Fuerzas Armadas de América Latina y el Caribe y las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos (2019)

Brasil	335 000
Colombia	293 000
México	277 000
Venezuela	123 000
Perú	81 000
Chile	77 000
Argentina	74 000
Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos	73 000
República Dominicana	56 000
Cuba	49 000
Ecuador	40 000

Fuente: International Institute for Strategic Studies, 2020, “International comparisons of defence expenditure and military personnel”, *The military balance* (Londres: IISS) y Turse, N. 2020 *America’s Commandos Deployed to 141 Countries and “Criminal Misconduct” Followed*, *Tom Dispatch* (19 de marzo)

²³ Al establecer una comparación con las Fuerzas Armadas de los países de América Latina y el Caribe, por sí mismas serían la séptima fuerza con mayores efectivos después de Brasil, Colombia, México, Venezuela, Perú y Argentina (*Military Balance*, 2020).

Aunque América Latina y el Caribe son uno de los sitios donde se llevan a cabo menos actividades de este tipo por parte de Estados Unidos, en el siglo XXI se ha verificado un cierto incremento. Para el año 2006, se estimaba que el componente del Southcom dedicado a estas tareas realizaba: “[...] setenta y cinco despliegues de sof al año con un promedio de quince misiones realizadas en siete países cada día” (Finlayson, 2006d). Pero en lo relativo a Colombia, lo que destaca es que se trata del único país de la región que ha contado con un componente de avanzada en Operaciones Especiales ubicado en la Embajada de Estados Unidos (Finlayson, 2006d).

Esto no siempre fue así y es por ello que el despliegue de este tipo de fuerzas por parte de Estados Unidos en Colombia, así como la adopción de las mismas como parte de la estructura del Ejército del país andino, resulta un elemento importante para comprender estas mutaciones. Este tipo de colaboración tiene un recorrido amplio en la relación entre ambos países y al mismo tiempo que nos ayuda a calibrar la cooperación entre ellos, permite dar cuenta de la trayectoria contrainsurgente colombiana y de los significativos aprendizajes que ha significado para Estados Unidos.

La cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia se remonta al menos, a la participación de efectivos colombianos en la Guerra de Corea, quienes fueron enviados en 1950 (Finlayson, 2006a). En 1959, durante el periodo de alternancia pactada entre Liberales y Conservadores conocido como Frente Nacional, la asistencia militar de Estados Unidos se incrementó. En ese proceso, destaca la conformación de un equipo conjunto, integrado por miembros de la CIA y del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes visitaron el país sudamericano para realizar una evaluación respecto a la violencia imperante. Esto resultó en la creación de la Unidad de Lanceros del Ejército Nacional de Colombia, dedicada a acciones antiguerrilla y cuyo curso de formación es considerado aun en la actualidad el más importante en la región (Briscoe, 2006a, 2006b).

En 1962, una nueva misión, ahora encabezada por el General William P. Yarborough, recomendó el envío de cinco equipos de

operaciones especiales (SF ODA) (Briscoe, 2006), así como la utilización de fuerzas civiles en el marco del Plan Lazo o LASO (Finlayson, 2006c; Beltrán 2015).²⁴ Lo ocurrido en Colombia a partir de dicha intervención es considerada una de las campañas de contrainsurgencia en el continente más exitosas de la época (Rempe, 2002) y que incorporó, además de acciones bélicas no convencionales, operaciones de guerra psicológica, acciones cívicas y tareas de inteligencia.

Sin embargo, en virtud del consabido repudio que han tenido este tipo de intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina, unos años más adelante, las modificaciones en la dinámica de los tráfico de estimulantes ilegales ofrecieron la justificación perfecta para poder hacer presencia a partir de argumentos diferentes.

Es bajo ese argumento que, en la estructura de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, existe desde 1985 una Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) trabajando de manera conjunta con la delegación de la DEA y el personal *propiamente* militar o dedicado a asuntos de defensa.

Ya en el marco del Plan Colombia, se consideró que la dimensión de la misión en el país andino ameritaba la instalación de una *forward operating base* (FOB) en uno de los tres batallones de las Fuerzas Especiales en Bogotá y debido a requisitos de despliegue, una compañía de Fuerzas Especiales configurada como *advanced operating base* (AOB) (Finlayson, 2006d). La misma que puede ser considerada de gran trascendencia, porque, desde esa locación, no solo se ha

²⁴ El Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional (Decreto de estado de sitio 3398) de 1965, reglamentado como norma permanente con la expedición de la Ley 48 de 1968, legalizó la conformación de grupos de autodefensa campesinas, autorizando el porte de armas por particulares y adjudicando prerrogativas a las Fuerzas Armadas para dotar de armamento a la población de entornos rurales con el objeto de enfrentar a los grupos guerrilleros (Insuasty, Valencia y Restrepo, 2016). Una versión distinta sobre el nombre de la iniciativa contrainsurgente refiere que las siglas LASO remitían a *Latin American Security Operation* lo que denota la clara influencia de Estados Unidos en la elaboración de la estrategia, cosa que siempre fue negada por los militares colombianos. En cambio, la denominación Lazo fue identificada con la acción de enlazar o cercar militarmente a las guerrillas liberales y comunistas. En el marco de dicho plan, fue destruida la aldea de Marquetalia lo que a la postre conformaría el mito fundacional de las FARC (Beltrán, 2015).

apoyado directamente a las fuerzas especiales en Colombia, sino que se ha establecido una relación de Comando y Control con las Operational Detachment Alpha (ODA) desplegadas en otros países de América del Sur. En 2006, por ejemplo, al mismo tiempo que se llevaban a cabo entrenamientos en Colombia, se apoyaban ejercicios conjuntos en Paraguay, Chile, Ecuador y Panamá, además de una *misión sensible* del SOCSOUTH (Finlayson, 2006e).

Como resultado de la colaboración de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, las Fuerzas Armadas del país andino crearon su propio Batallón de Operaciones Especiales dedicado a la lucha contra el narcotráfico, entrenado por sus pares del Ejército estadounidense (Kilkullen y Mills, 2015; Ejército Nacional de Colombia 2020a). Al mismo tiempo, las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA) de carácter antisubversivo fueron beneficiadas por el financiamiento y la tecnología contemplada como parte de la asistencia de la iniciativa bilateral (Ejército Nacional de Colombia, 2020b). En 2002, fue creado el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOPE) al mando de un Coronel quien reporta de manera directa al Comandante del Estado Mayor Conjunto de Colombia y ha sido rutinario que un oficial de Estados Unidos sea asignado para servir en el mismo (Finlayson, 2006c).

Esto resulta importante porque nos permite comprender que la presencia militar de Estados Unidos en América Latina comporta diferentes escalas y estratos, desde las más generales relacionadas con la movilidad de las fuerzas del Comando Sur a lo largo de la región a través de ejercicios militares, hasta la presencia constante y en cierto sentido más sutil dentro de los países del área.²⁵ En relación a este segundo elemento, las embajadas de Estados Unidos en todos los países del mundo contienen en su propio organigrama distintas funciones

²⁵ América Latina cuenta con seis de los veinticuatro Oficiales de Enlace de Operaciones Especiales (SOLO) que están asignados en todos los comandos geográficos (Briscoe, 2018c), además de ello ha implementado la Special Operations Command South (SOCSOUTH) Forward (SOC-FWD) en Colombia con atribuciones respecto a los países del Cono Sur y de la Cordillera de los Andes (Briscoe, 2018d).

militares y de seguridad. Entre estas se encuentran los Agregados Militares (DATT), el Grupo Asesor de Asistencia Militar (MAAG) y el Grupo Militar (MG). En virtud de que esta multiplicidad de figuras provocaba conflictos en la cadena de mando y la toma de decisiones, a partir de 2013, cuando fue lanzada la directiva 5205.75 del DOD, se estableció que el estatus de mayor jerarquía reside en el Agregado Militar que, a partir de entonces, es considerado Oficial Superior de Defensa (SDO) (Briscoe, 2018c).²⁶

Finalmente, en lo que refiere a los marcos de acción de las fuerzas apostadas de manera permanente por parte de Estados Unidos en Colombia, otro elemento que nos permite calibrar la importancia del país andino es la fuerza comúnmente desplegada desde el Comando de Operaciones Especiales del Comando Sur (SOCSOUTH) hacia Colombia para llevar a cabo este tipo de tareas. Se trata del 7th Special Forces Group (SFG), uno de los más antiguos en su tipo (1960), que contó con participación en Vietnam y a partir de la desactivación del 8TH SFG está asignado a América Latina y el Caribe.²⁷ Con posterioridad a 2001, esta fuerza de operaciones especiales rota entre el CENTCOM y el SOUTHCOM, por lo que las actividades que desarrollan en Colombia son consideradas aportes valiosos a su entrenamiento que después será puesto a prueba en las incursiones del hegemón en el área de responsabilidad de dicho comando geográfico (Finlayson, 2006d).

²⁶ Encargado de la coordinación de asuntos civiles (CA), operaciones especiales (SOF) y operaciones psicológicas (PSYOP). En términos más generales, tiene la responsabilidad de ser el enlace entre el Comando Sur y las instituciones de seguridad y defensa del país anfitrión (Briscoe, 2018c). Antes de su instauración en Colombia, fue implementado en El Salvador ante la preocupación de que la victoria electoral del FMLN (después de su derrota militar) se pudiera reiterar en el país andino en el marco de los procesos de diálogo en la Habana, por lo que se consideraba de vital importancia que el personal del DOD en Bogotá tuviera las condiciones para “[...]speak with one voice and become fully integrated with the embassy departments and supporting agencies, as well as the [Ejército de Colombia] COLMIL at all levels—tactical to operational to strategic” (Briscoe, 2018d).

²⁷ El 8th Special Forces Group funcionó de 1962 a 1972 en la Zona del Canal de Panamá (Briscoe, 2008).

El punto de quiebre

Las últimas dos décadas del siglo XX significaron para Colombia la convergencia de distintas problemáticas y posibilidades. Por un lado, el acumulado de alternativas desde la sociedad al conflicto armado interno, fueron sistemáticamente frustradas por la actuación del mercenarismo corporativo contrainsurgente (Franco, 2009), es decir, de la actuación alternada de agentes del Estado, grupos paramilitares y narcotraficantes con objetivos represivos. Este conglomerado impactó de una manera u otra en siete procesos de desmovilización de actores armados, entre los que resaltan los de dos grupos insurgentes de trascendencia (M-19 Y EPL) así como el cuestionado desarme de porciones de las AUC.²⁸ La cancelación de las vías civiles en Colombia durante esos años, pero cuya estela llega hasta nuestros días, cuenta como momentos paradigmáticos el curso seguido a la desmovilización del M-19 y el exterminio de la Unión Patriótica, este último considerado como un genocidio político.²⁹

De manera paralela, la década de los años ochenta había señalado el despegue de las organizaciones colombianas abocadas al tráfico de estimulantes ilegales. Especialmente notorio resultó el desarrollo del Cártel

²⁸ El M-19 fue una insurgencia de carácter esencialmente urbano, compuesto por capas medias y altas de la sociedad colombiana, así como con un perfil *intelectual*. Se destacaron por llevar a cabo acciones audaces entre las que destacan la sustracción de la espada de Simón Bolívar de su casa museo (1974), y la toma de las embajadas de República Dominicana (1980) y del Palacio de Justicia (1985). En marzo de 1990, fueron parte del primer proceso de desmovilización exitoso en Colombia y pasaron a la vida civil y conformaron la Alianza Democrática M-19. Postularon para las elecciones de ese mismo año al ex Comandante Carlos Pizarro, quien fue asesinado el 26 de abril (Behar, 1986; de Pablos, 2016).

²⁹ La Unión Patriótica fue un partido político creado a raíz de las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP a mediados de la década de los años ochenta. Su componente mayoritario han sido integrantes del Partido Comunista Colombiano (PCC). En concreto, es resultado de los acuerdos de La Uribe, que entre otras cosas estipulaban la creación de un movimiento de oposición como mecanismo para que la guerrilla se incorporase de manera paulatina a la vida legal del país. Durante veinte años, fueron objeto de ataques que incluyeron desaparición forzada, tortura y asesinatos sistemáticos. Hasta 2006, se estimaba que entre 4 mil y 5 mil integrantes habían sido asesinados, entre los cuales se cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, así como cientos de alcaldes y concejales (Cepeda, 2006; Sepúlveda, 2018).

de Medellín, que se logró imbricar en distintas escalas con el Estado colombiano y que, ante la imposibilidad de profundizar esa penetración, llevó a cabo distintas acciones que condujeron a su persecución.

Como fue señalado con anterioridad, fue precisamente a través de la definición del narcotráfico como amenaza que Estados Unidos logró relanzar su política intervencionista en la región, siendo Colombia el espacio privilegiado para la confección de dicha política. En 1992, el Southcom y el socom enviaron una Fuerza de Tarea Conjunta junto con personal de la DEA para asesinar a Pablo Escobar, cabeza visible del Cártel de Medellín. Para ello, fue creado el llamado *Bloque de Búsqueda* en el que tomaron parte, además de las agencias mencionadas, la Policía Nacional de Colombia y los llamados *Pepes*, o Perseguidos por Pablo Escobar, organización de ex integrantes del propio Cártel y entre los que se cuentan personajes después vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Barrios, 2014; Gresham, 2013).

En la misma época, resultó notorio el fortalecimiento de las organizaciones insurgentes, en especial en la segunda mitad de la década de los noventa, lo que fue potenciado por los recursos obtenidos a través de exacciones respecto a actividades productivas estatales, pero también de otras de carácter ilegal, además de la realización de retenciones (privación de la libertad). Como resultado de ello, se estima que la insurgencia logró desplegarse en más del sesenta por ciento del país, lo que, a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX, entró en sintonía con un proceso en que las Fuerzas Armadas colombianas habían visto crecer de manera desproporcionada su aparato burocrático en detrimento de sus capacidades de combate, lo que desde cierta perspectiva habría contribuido a la conformación de un “cómodo *impasse*” (Richani, 2003).³⁰

Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y en el marco de negociaciones de paz con las FARC-EP, fue creada una zona desmilitarizada

³⁰ Significativo del curso del conflicto en aquellos años es el proceso de conversión de las estructuras móviles de las FARC-EP, en un ejército irregular con la conformación de bloques regionales.

conocida como de despeje o de distensión en San Vicente del Caguán. Con una extensión de 42 mil kilómetros cuadrados, tenía una superficie que equivale a un área algo mayor al territorio de Suiza.

De manera simultánea a la realización de los diálogos de paz, el gobierno del país avanzaba en el diseño e instrumentación del Plan Colombia y, en febrero de 2002, dio por finalizadas las conversaciones de manera unilateral, lanzando la Operación Thanatos con el envío de 20 mil soldados y el objetivo de recuperar el área desmilitarizada. El fracaso de estas negociaciones permitió la articulación de un discurso reaccionario y belicista, que sería encarnado en la figura de Álvaro Uribe, quien a la postre impulsaría la política de Seguridad Democrática. De esta manera, el estancamiento del conflicto colombiano llegó a su fin a partir de la formulación del Plan Colombia y la inyección de ingentes recursos a las Fuerzas Armadas, pero también por la decisiva incorporación de otros actores armados en la contienda, como será expuesto en el próximo apartado.

Mapa 1. Zona de distensión de San Vicente del Caguán



Fuente: elaboración de David Barrios Rodríguez.

Paramilitarismo contrainsurgente y privatización de la guerra

A contramano de perspectivas que consideran la privatización de la seguridad y la guerra como una anomalía histórica, la existencia de actores armados privados comporta mayor regularidad en el tiempo que la conformación de ejércitos profesionales, toda vez que formas de violencia y guerra caracterizadas por la participación de este tipo de combatientes, fuerzas dispersas-irregulares, ha sido una condición más constante en el desarrollo de los conflictos bélicos (Singer, 2008). Sobre este aspecto vale establecer con mucha claridad los rasgos del fenómeno y no sucumbir a la tentación de realizar extrapolaciones respecto a manifestaciones de privatización de la seguridad y la violencia, como ha ocurrido con los escuadrones de la muerte o con el *warlordism* (señores de la guerra).³¹

En cambio, una de las características de la guerra irregular en la actualidad consiste en que los Estados busquen *apoyo* en la población civil o en actores privados. Esto permite entre otras cosas, mejorar el conocimiento del terreno en determinadas áreas en disputa, poder llevar a cabo acciones por fuera de los marcos normativos vigentes y en términos generales establecer un desdoblamiento que vuelva más

³¹ Los escuadrones de la muerte, entendidos como grupos irregulares fomentados con frecuencia por el gobierno y cuya principal actividad es el asesinato, tienen como una de sus características ser grupos clandestinos pero que a través del asesinato buscan llevar un mensaje lo más lejos posible (Campbell y Brenner, 2000). La actividad central que desarrollan, el asesinato de sectores poblacionales o como medida represiva o para amedrentar a opositores políticos sigue siendo realizada por una diversidad de actores entre las que se cuentan grupos de sicarios, maras o en el caso de Brasil, las milicias. Los *señores de la guerra* constituyen una figura que da cuenta de liderazgos que se dan durante o con posterioridad a un conflicto armado y que controlan un determinado *territorio*. Se caracterizan por contar con ejércitos privados alimentados por *economías de posguerra* basadas en la explotación de bienes naturales, metales preciosos o a través del cultivo de estimulantes ilegales. La participación en estas actividades económicas les permite vincularse con mercados y empresas transnacionales. También la expoliación de la población bajo su control a través del cobro de impuestos está prevista como uno de los elementos que les permiten subsistir. En algunos casos, estos liderazgos trascienden a los conflictos armados y pueden eventualmente hacer parte de la institucionalidad formal (Schneckener, 2006). Otra aproximación junto con una reconstrucción histórica del *warlordism* es desarrollada por Antonio Giustozzi (2005).

eficaces operaciones en los terrenos de la información, propaganda o la guerra psicológica.

En lo que se refiere al periodo contemporáneo, en Colombia podemos considerar significativa la aparición y expansión de las Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP) que durante la década de los años noventa, actuaron de manera conjunta con Fuerzas Armadas colombianas y corporaciones para contrarrestar las actividades de la insurgencia, en especial en relación al resguardo de instalaciones y ductos petroleros. Ejemplo de ello es la empresa británica Defense Systems Limited (DSL) contratada por British Petroleum (BP) para impartir cursos de entrenamiento a la Policía Nacional con el objeto de proteger su infraestructura (Werner y Seifert, 2012). También merece la pena mencionar las actividades de la Occidental Petroleum (Oxy), que pagó 2 millones de dólares a la decimotava Brigada del Ejército de Colombia por el resguardo de sus oleoductos en Arauca en 1997 (Leech, 2007). Al año siguiente, en un bombardeo de la fuerza aérea colombiana, fueron asesinadas 17 personas (entre ellos siete niños), mientras que otras 25 resultaron heridas en un operativo ordenado por mercenarios de la empresa Air Scan contratados por Oxy (Perret, 2009). Con posterioridad al lanzamiento del Plan Colombia, Estados Unidos incorporó CMSP en sus actividades en el país andino, bajo la difusa figura de ser empresas contratistas. El Departamento de Estado (DOE) y el Departamento de Defensa (DOD) implicaron a Dyncorp y a Southcom Reconnaissance Systems (SRS), subsidiaria de Northrop Grumman en tareas de erradicación y monitoreo de cultivos (Briscoe, 2018a).³²

³² Tres *contratistas* de SRS, Marc D. Gonsalves, Keith D. Stansell y Thomas R. Howes fueron rescatados después de un accidente en helicóptero y hechos prisioneros por las FARC-EP, lo que a la postre redundaría en distintas operaciones de rescate entre las que destacan *Willing Spirit*, *ELIPSE* y finalmente la más conocida *JAQUE* (Briscoe, 2018a, 2018b). Otra versión señala que el helicóptero fue derribado por las FARC-EP (Beltrán, 2015). El episodio es relevante más allá de lo anecdótico, porque permitió durante varios años la actuación de Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos en el país e inclusive permite explicar la creación de cierta arquitectura militar como las AOB y FOB señaladas con anterioridad, toda vez que el rescate de los contratistas fue

Sin embargo, en lo que se refiere a la incorporación de actores privados, Colombia ofrece uno de los ejemplos más acabados de paramilitarismo contrainsurgente, mismo que fortaleció el carácter de la guerra irregular en el país y que entró en sintonía con la disposición de grupos de poder públicos y privados, lo que, visto en perspectiva, ha permitido la avanzada sobre territorios, así como bienes naturales y estratégicos.

En este caso, también existen antecedentes del fenómeno, por lo que Raul Zelik distingue cuatro generaciones de paramilitarismo en Colombia. La primera encarnada en la versión local de la Triple A (Acción Americana Anticomunista) que operó a finales de la década de los años setenta. Este grupo ejemplifica el paramilitarismo de vertiente institucional, al estar conformado por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado. A continuación, en los años ochenta, surgieron diversas expresiones de grupos paramilitares, desde el conocido como Muerte a Secuestradores (MAS) financiado por el narcotráfico, grupos de *autodefensa* en contra de las acciones de la insurgencia y expresiones que tendieron hacia la *limpieza social* lo que implicó que “los límites entre sicariato, organizaciones cívico-militares y ejércitos privados comenzaron a diluirse en esta fase” (Zelik, 2015, p. 27).³³

A fines de la década, se comienzan a organizar las estructuras armadas militarizadas del paramilitarismo contrainsurgente, en cuya cabeza se identifica a los hermanos Castaño y que derivaría en la conformación en 1994 de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y

considerado como la principal prioridad del componente de Operaciones Especiales del Comando Sur a partir de 2005.

³³ Respecto a los grupos de autodefensa, destaca en la década de los años ochenta la aparición de milicias armadas apoyadas por el Estado colombiano. Su finalidad era contrarrestar el control de la insurgencia, especialmente de las FARC, quienes *vacunaban* a ganaderos de la zona, lo que redundó en la conformación de la ACDEGAM (Magdalena Medio) que se expandieron hasta Puerto Boyacá, uno de los bastiones del paramilitarismo patrimonial. Otra perspectiva de análisis sobre esta etapa, señala una relación estrecha entre la aparición de esta vertiente paramilitar y la apropiación de tierras por parte de estructuras abocadas al narcotráfico que a partir de esa relación de propiedad se enfrentan con las insurgencias (Insuasty, Valencia y Restrepo, 2016).

Urabá (ACCU) y en 1997 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).³⁴ Estas últimas tenían continuidad con expresiones previas, por ejemplo, las ACCU, que reunieron a varios de los grupos de limpieza social y escuadrones de la muerte existentes en Antioquia como Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), el ya señalado MAS y Muerte a Revolucionarios del Urabá (Insuasty, Valencia y Restrepo, 2016).

En esa tercera generación del paramilitarismo, resulta notable el vínculo con el Estado colombiano que se puede establecer a partir de diversos elementos. Uno de los más elocuentes fue el amparo institucional abierto, como ocurrió con su legalización en 1994 a través de la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), que operaron entre 1995 y 1999 y que enfrentaron a las milicias y a la insurgencia, al mismo tiempo que realizaron labores de *seguridad pública*, hasta que fueron declaradas ilegales por la corte Constitucional.

En términos discursivos, pero también en su estructura (a través de la conformación de bloques y frentes) las AUC *clonaron* la forma de operar de la insurgencia, al apelar a un pretendido programa de reformas políticas y sociales o al utilizar indumentaria, formas de operación e inclusive denominaciones de sus estructuras que funcionaban como espejo de la insurgencia, lo que constituyó, en suma, construir una cierta simetría entre rebeldes de derecha e izquierda, o mejor dicho, la irregularización de la violencia, impulsada por los grupos de poder (Zelik, 2015). Se trata de aquello que el griego Stathis Kalyvas ha denominado “guerra civil no convencional simétrica” (Kalyvas, 2010).

La última generación del paramilitarismo fue el resultado del proceso de desmovilización de 2003 (durante el gobierno de Uribe Vélez) y la aparición de las BACRIM antes referidas. Éstas constituyen

³⁴ Los grupos paramilitares colombianos, no sin intermediación de autoridades militares del país, recibieron entrenamiento por parte de mercenarios y exmilitares de Israel, siendo uno de los casos más llamativos la asesoría de Yahir Klein creador de la CMPS *hoJanit* (Punta de Lanza), a quien se le atribuye un papel determinante en el entrenamiento de integrantes de lo que a la postre serían las AUC (Behar y Ardila, 2012).

la actualización e integración de los fenómenos del narcotráfico y el paramilitarismo contrainsurgente posdesmovilización y se expresan en organizaciones como La Oficina de Envigado, Aguilas Negras, Rastrojos o Urabeños, estructuras mayores que a su vez se disputan a las bandas o combos en las ciudades abocadas al tráfico de estimulantes ilegales, extorsiones y otras actividades económicas, pero que en otros contextos operan como grupos sicariales, aunque también realizan *paros armados* y establecen como objetivos militares a sectores organizados o movilizados de la población.

Plan Colombia

La implementación del Plan Colombia surgió de manera pública como iniciativa antidrogas, pero con el paso del tiempo adquirió un abierto carácter de apoyo al combate a la insurgencia colombiana, configurando una retórica que hizo equivalente la lucha contra ambas problemáticas. Al ser una iniciativa de tipo bilateral (aunque de subordinación implícita) con Estados Unidos, la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 18 (NSPD-12) de 2002, durante el mandato de George W. Bush, que definió a las FARC-EP, ELN y a las AUC como organizaciones terroristas, permitió incrementar el apoyo logístico y de colaboración en tareas de inteligencia con el gobierno colombiano.

A partir de ello, fue autorizado el despliegue masivo de personal de Estados Unidos en el país. En el año 2000, el Congreso de Estados Unidos había colocado un *techo* de 400 efectivos, mitad militares y mitad civiles, pero, en 2005, la National Defense Authorization Act permitió duplicar la cifra que, además, no incluía al personal de la Embajada de Estados Unidos ni a los integrantes del grupo militar (MILGP) de la misma.

El diseño del Plan Colombia especificaba que la asistencia de Estados Unidos estaría concentrada en cinco áreas: apoyo para llevar a cabo una reforma judicial, expansión de actividades antinarcóticos en el Sur del país andino, sustitución de cultivos de hoja de coca,

incremento de la capacidad del Ejército colombiano para proteger el oleoducto Caño-Limón y el suministro de infraestructura militar de punta (helicópteros, aeronaves para erradicación de cultivos y equipos de comunicación) (Finlayson, 2006b). Además de ello, resalta que el entrenamiento de militares colombianos fue asignado de manera primaria a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos (Jones, 2006).

A pesar de que el Plan Colombia se concibió durante la administración de Andrés Pastrana, fue durante los periodos de Álvaro Uribe (2002-2010) que se impulsó una ofensiva sin precedente sobre las insurgencias colombianas y en especial hacia las FARC-EP.³⁵ En términos generales, destaca un primer periodo contrainsurgente encarnado en la Seguridad Democrática, apoyada por el componente paramilitar de las AUC y un segundo momento en que adquirieron un rol central los equipos de operaciones especiales en el marco de la denominada “Consolidación de la Seguridad Democrática” (Marks, 2010). En el primer caso, la vertiente estrictamente militar de esta política fue el Plan Patriota, extensiva campaña bélica en el Sur y el Oriente del país lanzada en 2005 y que desplegó 18 mil efectivos.

La eficacia de la política contrainsurgente del Uribismo puede ser calibrada a partir de la estimación que señala que, durante sus administraciones, las fuerzas de combate de las FARC-EP pasaron de 20 mil a 9 mil combatientes en activo (Domínguez, 2016).³⁶ La conjunción

³⁵ A lo que se agrega la instauración de un *impuesto en bienestar* con propósitos de seguridad, dirigido a comerciantes y estratos privilegiados de la sociedad colombiana. Con un aporte de dichos sectores del 1,3 por ciento durante la década del 2000, hizo elevar de 3 a poco más del 4 por ciento el presupuesto de defensa. El ingreso de estos recursos junto con el financiamiento de Estados Unidos permitió renovar y adquirir tecnología bélica de gran trascendencia en las campañas contrainsurgentes como UAV's, helicópteros Black Hawk, aeronaves Super Tucano, armas de precisión guiada y equipos de telecomunicación y vigilancia avanzados. En términos administrativos, fue creado el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI) que centraliza las acciones de reconstrucción y estabilización y que reporta directamente al presidente del país.

³⁶ Este proceso continuaría en la administración de Juan Manuel Santos (ex ministro de defensa de Uribe), quien inició con la formulación de la Estrategia Espada de Honor, cuyo objetivo era reducir de nuevo a la mitad los efectivos de la insurgencia, pero fue prevenido de que el énfasis debería estar en este caso, en los elementos civiles de la

del modelo corporativo paramilitar interno y el apoyo logístico y financiero de Estados Unidos logró asesinar a parte de la dirigencia (se estimaban 55 cuadros altos y medios hacia 2015) de las FARC-EP, además de establecer un control territorial que en ocasiones jamás había tenido el Estado colombiano. La mano del juego estatal en esas condiciones quedó patente cuando los diálogos fueron abiertos en noviembre de 2012. Pero quizá uno de los logros de mayor trascendencia se puede desprender de la aseveración del ex ministro de defensa y ex embajador de Colombia en Estados Unidos respecto a que la estrategia de Uribe Vélez logró consolidar como principal objetivo político “[...]achieve broader popular legitimacy through a «hearts and minds» campaign.” (Pinzón, 2016). Esto se manifiesta en la popularidad alcanzada por Uribe y la influencia que mantiene sobre la política colombiana hasta la actualidad.

Caminos abiertos

Al comienzo de este texto, se aludió a la importancia que adquirió Colombia para Estados Unidos y su agenda hemisférica. Además de los elementos que son mayormente señalados respecto a su carácter de plataforma militar o de las implicaciones que tiene el entrenamiento a policías y Fuerzas Armadas de otros países del área, se hizo énfasis en los aprendizajes que el proceso colombiano ha reportado para la elaboración y adaptación de la estrategia militar del hegemón en los albores del siglo XXI.³⁷ En específico, la incorporación doctrinaria formal de la guerra irregular por parte de Estados Unidos se ha

contrainsurgencia a partir de la necesidad de eliminar el apoyo social en áreas rurales e indígenas de las organizaciones político militares de izquierda (Domínguez, 2016).

³⁷ La movilidad de Fuerzas de Estados Unidos en la región es un asunto de la mayor relevancia. En el caso de Colombia, la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo sobre siete bases militares de Estados Unidos en el país andino, más allá de ser un triunfo simbólico del movimiento social colombiano por la soberanía y la desmilitarización, no hizo sino poner de relieve la inusitada presencia que la potencia tiene en el país.

nutrido de la colaboración con el ejército y gobierno colombianos a partir de la experiencia en guerra contrainsurgente, tanto de sus vertientes a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, como de su reformulación en este siglo XXI.³⁸ De este proceso, destaca también la actuación de actores armados privados entre los que se cuentan las CMSP y especialmente el paramilitarismo contrainsurgente, en una época que se caracteriza por la utilización generalizada de fuerzas pretendidamente civiles o de actores armados no estatales para apuntalar las estrategias bélicas.

Respecto a los logros de la asistencia militar de Estados Unidos en Colombia, vale la pena traer a cuenta un par de elementos. En relación a la lucha antinarcoóticos, resalta que después de la inversión de ingentes recursos en la materia y la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, Colombia haya alcanzado records de cultivos de hoja de coca y producción de cocaína en 2017 (CRS, 2020). En el rubro de Derechos Humanos, un discurso que con frecuencia es usado para condenar a países como Venezuela o Cuba, Colombia sigue descollando a nivel mundial por procesos de desplazamiento interno forzado o el hostigamiento y asesinato de líderes sociales.

En un estrato muy profundo y que resulta uno de los retos más grandes para su sociedad, destaca en Colombia la conformación de una narrativa y subjetividad contrainsurgente construida a lo largo de las décadas.³⁹ Con todo y bastante más que cien años de guerra, de todos los procesos de paz frustrados, del despliegue de las formas más atroces de violencia, en Colombia, con la tenacidad que es su principal característica, las apuestas organizativas se replican de manera incesante, actualizando sus repertorios y agendas, eludiendo el proyecto de exterminio, rehaciendo el camino hacia la amenazada posibilidad de futuro.

³⁸ De acuerdo a lo señalado por Juan Carlos Pinzón, entre 2011 y 2016, el país andino habría entrenado a 24 mil efectivos de sesenta países del mundo (Pinzón, 2016).

³⁹ Narrativas y discursos que cuentan con recorridos genealógicos, como ocurre con la figura del liberal reconvertido en comunista, ateo y eventualmente guerrillero. La actualización de esta narrativa en las últimas décadas es la construcción en torno al terrorista (Puerta, 2010).

Bibliografía

- Barrios, Rodríguez, David (2014). Comando Sur: Cincuenta años de ampliación del espectro de dominación. *América Latina en Movimiento*. Quito: ALAI.
- Barrios, Rodríguez, David (2019). Guerra híbrida: origen y usos políticos. *América Latina en Movimiento*. Quito: ALAI.
- Behar, Olga, (1986). *Las guerras de la paz*. Bogotá: Planeta.
- Behar, Olga y Ardila, Carolina (2012). *El caso Klein. El origen del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá: Ícono.
- Beittel, June (2020). Colombia background and U.S. relations, *Congressional Research Service*. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43813>
- Beltrán Villegas, Miguel Ángel (2015). *Las FARC-EP (1950-2015): Luchas de ira y esperanza*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- Bilgin, Pinar y Morton, Adam David (2004). From “Rogue” to “Failed” States? The Fallacy of Short-termism. *Politics*. Londres: Political Studies Association.
- Blunt, Roy et al. (2017), *A Roadmap for US Engagement with Colombia*. Washington: Atlantic Council.
- Bonavena, Pablo y Nievas, Flabián (2014). *Guerra: modernidad y contra-modernidad*. Buenos Aires: Final Abierto.
- Briscoe, Charles (2006a). *Plan Lazo*. Evaluation and Execution. *Veritas*, 2(4).
- Briscoe, Charles (2006b). Colombian Lancero root school. *Veritas*, 2(4).
- Briscoe, Charles (2008). 8TH Special forces group. *Veritas*, 4(1).
- Briscoe, Charles (2018a). Operation Willing Spirit (OWS) Setting Conditions for *Operación Jaque*. *Veritas*, 14(3).
- Briscoe, Charles (2018b). Who’s in charge down here? *Veritas*, 14(3).
- Briscoe, Charles (2018c). Joint SOF integration. SDO, Bogotá. *Veritas*, 14(3).
- Briscoe, Charles (2018d). Total immersion language, culture, and the colombian military. *Veritas*, 14(3).

- Briscoe, Charles y Kulich, Daniel (2018). Operación Jaque. The ultimate deception. *Veritas*, 14(3).
- Campbell, Bruce y Brenner, Arthur (2000). *Death squads in global perspective. Murder with deniability*. Londres: Macmillan Press.
- Ceceña, Ana Esther et al. (2010). *Un continente bajo amenaza. El águila imperial se despliega*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales-OLAG.
- Ceceña, Ana Esther (2014). Los golpes de espectro completo. *América Latina en Movimiento*, (495).
- Ceceña, Ana Esther (octubre-diciembre de 2018). Territorialidad del poder. *Inclusiones*, 5(4).
- Ceceña Ana Esther y Barrios Rodríguez, David (2019). Dominación capitalista y geopolítica continental. *Revista de Estudios Estratégicos*.
- Cepeda, Iván (2006). Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. *Revista CEJI*, I(2).
- Comaroff, Jean y Comaroff, John (2009). *Violencia y Ley en la poscolonia: Una reflexión sobre las complicidades Norte-Sur*. Catalunya: Katz Editores.
- Dados, Nour y Connell, Raewyn (invierno de 2012). The Global South. *Contexts*. Washington: American Sociological Association.
- Department of Defense (2006). *Quadrennial Defense Review Report*. Virginia: DoD.
- Department of Defense (diciembre de 2008). *Directive 3000.07: Irregular Warfare*. Virginia: DoD.
- Department of Defense (mayo de 2010). *Joint Operating Concept. Irregular warfare: Countering Irregular Threats*. Virginia: DoD. (versión 2.0)
- Department of Defense (2018). *Summary of the National Defense Strategy*. Virginia.
- Department of Defense (2019). What has taken the place of the Quadrennial Defense Review (QDR). Virginia: DoD. <https://www.defense.gov/ask-us/faq/Article/1774728/what-has-taken-the-place-of-the-quadrennial-defense-review-qdr/>

Domínguez, Agustín (2016). After the Negotiations How Reconstruction Teams Can Build a Stronger Peace in Colombia. *Prism*.

Dunford, Joe (30 de octubre de 2018). Global Integration -- Maintaining a Competitive Advantage. <<https://www.jcs.mil/Media/News/News-Display/Article/1681761/global-integration-maintaining-a-competitive-advantage/>>

Ejército Nacional de Colombia (2017). *Manual fundamental del ejército* MFE 1-01-Doctrina. Bogotá: Imprenta Nacional del Ejército.

Espinal, Verónica; Escobar, Juan Carlos y Flores, Carlos (comps.) (2010). *Izquierda y derecha. Discursos y actores de la política contemporánea*. Medellín: Universidad de Medellín.

Finlayson, Kenneth (2006a). ARSOF in Colombia. Introduction. *Veritas*, 2(4).

Finlayson, Kenneth (2006b). Colombia. A Special Relationship. *Veritas*, 2(4).

Finlayson, Kenneth (2006c). Colombian special operation forces. *Veritas*, 2(4).

Finlayson, Kenneth (2006d). U.S. Forces. The Major Command Structure. *Veritas*, 2(4).

Finlayson, Kenneth (2006e). "Conducting the orchestra" AOB 740 in Colombia. *Veritas*, 2(4).

Franco, Restrepo, Vilma Lilibiana (2009). *Orden contrainsurgente y dominación*. Bogotá: Siglo del Hombre editores.

Giustozzi, Antonio (2005). The debate on warlordism: the importance of military legitimacy. *Discussion Papers* (13).

Grajales, Jacobo (2017). *Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en Colombia*. Bogotá: Universidad del Rosario.

Gresham, John (2013). *Southcom History. Southcom. A half century of service*. Florida: Defense Media Network.

International Institute for Strategic Studies (2020). International comparisons of defence expenditure and military personnel. *The military balance*. Londres: IISS.

Joint Chief of Staff (2017). *Joint Publication 1. Doctrine for the Armed Forces of the United States*. Washington.

- Joint Chief of Staff (2018). *Joint Publication 3-22. Foreign Internal Defense*. Washington.
- Jones, Robert (2006). Plan Colombia and Plan Patriota. The Evolution of Colombia's National Strategy. *Veritas*.
- Kaldor, Mary (2001). *Las nuevas guerras: la violencia organizada en la era global*. Barcelona: Tusquets.
- Kalyvas, Stathis (2010). *La lógica de la violencia en la guerra civil*. Madrid: Akal.
- Kilkullen, David y Mills, Greg (2015). Colombia A Political Economy of War to an Inclusive Peace, *Prism* 5(3).
- Koonings, Kees y Kruijt, Dirk (eds.) (2002). *Las sociedades del miedo. El legado de la guerra civil, la violencia y el terror en América Latina*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Kortüm, Hans-Henning (2006). Clash of Typologies -The Naming of Wars and the Invention of Typologies. En Kortüm, H. *Transcultural Wars from the Middle Ages to the 21st Century*. Akademie Verlag.
- Kümmel, Gerhard (2006). A soldier is a soldier is a soldier!?! The military and its soldiers in an era of globalization. Caforio Giuseppe (ed.) *Handbook of the Sociology of the Military*. Springer.
- Leech, Garry (2007). *EE.UU., el petróleo y el (des) orden mundial*. México: Editorial Popular.
- Lind, William (enero-febrero de 2005). Comprendiendo la Guerra de Cuarta Generación. *Military Review*. Edición Hispanoamérica. pp. 12-17.
- Lindsay, Poland, John (2018). *Plan Colombia. U.S. ally atrocities and community activism*. Durham: Duke University Press.
- Mann, Michael (10-13 de abril de 2002). The Crisis of the Latin American Nation-State. Ponencia presentada en la conferencia *Crisis Política y Conflicto Interno en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Marks, Thomas; Gorka, Sebastian y Sharp Robert (2010). Getting the next war right beyond population-centric warfare. *Prism*, 1(3).
- Marks, Thomas (2010). Colombia. Learning Institutions Enable Integrated Response. *Prism*, 1(4).

Mattar, Karim (2012). Re reading the rogue state. *Interventions. International Journal of Postcolonial Studies*. pp. 551-568.

Márquez, Iván (2019). *La segunda Marquetalia. La lucha sigue*. Bogotá: Segunda Marquetalia editores.

Marra, Michael y Bennett, Douglas (18 de febrero de 2020). Plan Colombia: Learning from a light-footprint “America second” military strategy. *Small Wars Journal*.

Medina, Gallego, Carlos (2019). *Ejército de Liberación Nacional (ELN) Historia de las ideas políticas (1958-2018)*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Molano, Alfredo (1985). *Los años del tropel. Relatos de la violencia*. Bogotá: Cinep.

Moncada, Eduardo (2017). Varieties of vigilantism: conceptual discord, meaning and strategies. *Global Crime* 18(4).

Movimiento de Reconciliación (FOR) -Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) (2014). “Falsos positivos” en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010. Bogotá.

Munkler, Herfried (2005). *Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia*. Madrid: Siglo XXI Editores.

Nay, Olivier (2013). Fragile and failed states: Critical perspectives on conceptual hybrids. *International Political Science Review*. International Political Science Association.

Nievas, Flabián (ed.) (2006). *Aportes para una sociología de la guerra*. Buenos Aires: Proyecto editorial.

O’ Reilly, Kevin (2007). Perceiving Rogue States: The Use of the “Rogue State” Concept by U.S. Foreign Policy Elites. *Foreign Policy Analysis*, 3(4).

Oslender, Ulrich (agosto de 2008). “Geografías del terror”: un marco de análisis para el estudio del terror. *Scripta Nova*, XII(270).

Ospina Ovalle Carlos (2013). Colombia Updating the Mission? *Prism*, 2(4).

OTAN (2018). *Relations with Colombia*. https://www.nato.int/cps/en/nato-hq/topics_143936.htm

- Pinzón, Juan Carlos (2016). Colombia Back from the Brink From Failed State to Exporter of Security. *Prism*. pp. 3-9. Washington: INSS.
- Pizarro, Eduardo (2005). Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En Gutiérrez, Sanín F. (coord.), *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: IEPRI-Norma.
- Perret, Antoine (2009). *Las compañías militares y de seguridad privadas en Colombia ¿una nueva forma de mercenarismo?* Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Puerta, Henao, Catalina (2010). Discurso Político y violencia en Colombia. O cómo se construye un enemigo, 1949-1980. En Espinal, Verónica; Escobar, Juan Carlos y Flores, Carlos (comp.) *Izquierda y derecha. Discursos y actores de la política contemporánea*. Universidad de Medellín.
- Rempe Dennis (2002). *The Past as a Prologue? A History of Counterinsurgency Policy in Colombia, 1958–1966*. Pennsylvania: Strategic Studies Institute.
- Richani, Nazih (2002). *Sistemas de guerra. La economía política del conflicto en Colombia*. Bogotá: IEPRI.
- Ruzza Stefano y Geisler, Charles (2017). Introduction: The Siege of Westphalia? En Ruzza, Stefano; Jakobi, Anja y Geisler, Charles; *Non-State Challenges in a Re-Ordered World. The Jackals of Westphalia*. Nueva York: Routledge.
- Sacquety, Troy (2006a). Colombia's troubled past. *Veritas*, 2(4)
- Sacquety, Troy (2006b). Colombian military forces. *Veritas*, 2(4).
- Schneckener, Ulrich (2006). *Fragile Statehood, Armed Non-State Actors and Security Governance*. Berlin: LIT.
- Serrano, Mónica y Palacios, Marco (2012). Colombia y México: Las violencias del narcotráfico. En Alvarado, Arturo y Serrano, Mónica, *Los grandes problemas de México XV. Seguridad Nacional y Seguridad Interior*. Ciudad de México: El Colegio de México.
- Sepúlveda, Juan Pablo (2018). "Todo pasó ante nuestros ojos": claves del informe sobre el exterminio de la UP. *Pacifista!* <https://pacifista.tv/notas/todo-paso-ante-nuestros-ojos-claves-del-informe-sobre-el-exterminio-de-la-up/>

Singer, Peter Warren (2008). *Corporate warriors. The rise of the privatized military industry*. Cornell University Press.

Spencer, David (2019). Security challenges of the new colombian administration. *Prism*. Washington: INSS.

Stewart, Patrick (2007). “Failed” states and global security: Empirical questions and policy dilemmas. *International Studies Review*. Oxford University Press.

Turse, Nick (2020). America’s commandos deployed to 141 countries and “criminal misconduct” followed. *Tom Dispatch*. https://www.tomdispatch.com/blog/176677/tomgram%3A_nick_turse%2C_america%27s_commandos%3A_what_did_they_do_and_where_did_they_do_it

Werner, Klaus y Seifert Thomas (2012). *El libro negro del petróleo. Una historia de codicia, guerra, poder y dinero*. Buenos Aires: Le Monde Diplomatique.

Zelik, Raul (2015). *Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia*. Bogotá: Siglo del Hombre editores.